

Tendencias antiliberales en el discurso político de la izquierda estadounidense

Anti-liberal tendencies in the political discourse of the American left

Carlos Alfredo Dávila Aguilar*

Resumen

El presente ensayo revisa varios ejemplos recientes de cómo se han extendido discursos y demandas políticas sobre los derechos de las minorías en la izquierda estadounidense que podrían calificarse como antiliberales; y que se han popularizado durante las últimas décadas, principalmente entre los universitarios. La idea es vincular esta tendencia con fenómenos como la creciente polarización política, la relegación de las clases bajas del debate público y el resultado de las elecciones presidenciales de 2016.

Palabras clave: discurso, minorías, democracia, liberalismo, Estados Unidos.

Abstract

This essay reviews several recent examples of how political discourses and demands on minority rights have been extended on the American left that could be described as anti-liberal; and that have become popular in recent decades, mainly among university students. The idea is to link this trend with phenomena such as increasing political polarization, the relegation of the lower classes from public debate and the outcome of the 2016 presidential election

Keywords: discourse, minorities, democracy, liberalism, United States

*... las ideas erróneas sobre la democracia
determinan que la democracia funcione mal.*

GIOVANNI SARTORI

*Intentaron hacerme odiar a la gente blanca,
pero alguien siempre aparecería para echarlo a perder.*

THELONIOUS MONK

El 2 de mayo de 2014, la revista *Time* publicó el ensayo titulado “Por qué nunca me disculparé por mi privilegio de varón blanco” (*Why i'll never apologize for my white male privilege*), escrito por un joven estudiante de Princeton. Seguramente no fue ésta la única señal de alerta sobre

Recibido: 2 de septiembre, 2019. *Aceptado:* 22 de enero, 2020.

* Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Líneas de investigación: Democracia, Derechos de las minorías, Liberalismo.

la escalada de las tensiones raciales y la polarización política en Estados Unidos; pero si aquella sociedad hubiera reaccionado ante estas señales de manera inteligente, probablemente el mundo no estaría enfrentando una administración presidencial en Estados Unidos a cargo de Donald Trump.

En su ensayo, Tal Fortgang, entonces estudiante de primer año, denunciaba las reducciones simplistas y las generalizaciones contenidas en una pequeña frase: “check your privilege” (“revisa tu privilegio”), señalando que la fórmula asume injustamente que un individuo puede ser juzgado *a priori* en función del grupo étnico al que pertenece.

En efecto, esta breve frase, que se refiere al “privilegio” de ser blanco y varón en Estados Unidos, se ha convertido en un comodín recurrente utilizado en los acalorados debates universitarios para desacreditar el punto de vista de cualquiera que no concuerde con lo que se ha convertido en la nueva ideología hegemónica en los *campi* norteamericanos respecto de las demandas de las minorías, y que cumpla con las dos características mencionadas —aunque sólo una de las dos también suele ser suficiente.

Lo que se propone a continuación es una exposición clara de los elementos antidemocráticos e intolerantes contenidos en la ideología difusa de la *política identitaria* de la izquierda estadounidense, junto con ciertos ejemplos puntuales que reflejan la creciente institucionalización de algunos de sus principios antiliberales en universidades, medios de comunicación y círculos intelectuales.

Retomo la tesis planteada por el profesor Mark Lilla —en su artículo “The End of Identity Liberalism”—, sobre cómo estos discursos han contribuido a la polarización exacerbada de la sociedad estadounidense, a la relegación de las clases bajas del debate público y, en última instancia, al ascenso del populismo irredento de Trump en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Finalmente, se argumenta cómo los mismos principios e instituciones liberales atacados insistentemente por estos discursos son indispensables para la protección de las minorías y de los individuos disidentes en el marco de una sociedad democrática.

Intransigencia, el “saco de los deplorables” y “el lado correcto de la Historia”

Aunque podría parecer un tema menor, la crítica realizada por Fortgang a la lógica detrás de la frase *check your privilege* tiene importantes implicaciones institucionales en Estados Unidos, especialmente en las universidades. En concreto, cuestiona la misma lógica que hay detrás de las políticas de “acción

afirmativa” o “discriminación inversa” impulsadas con fuerza desde hace un par de décadas en puestos públicos, empresa privada y universidades de aquel país, y que suelen traducirse en cuotas étnicas o de género en favor de los grupos públicamente reconocidos como vulnerables.

Una de las ideas que soportan la legitimidad de este tipo de políticas es la de la *compensación histórica* en términos grupales –como se verá, este carácter colectivista es fundamental. La pregunta natural que suscita esta idea es: ¿se puede compensar a los descendientes por las injusticias cometidas contra sus ancestros, a costa de personas inocentes en la actualidad que, suponemos, descienden de los perpetradores de las injusticias originales?

Es evidente que llevar a cabo esta *compensación histórica* es imposible sin incurrir en nuevas injusticias. No obstante, un examen honesto de esta problemática implica reconocer que, efectivamente, las injusticias históricas denunciadas por los promotores de estas políticas han reproducido inercialmente condiciones socioeconómicas injustas entre las categorías demográficas. Por otra parte, es igualmente necesario reconocer que la brecha de desigualdad persistente presenta variaciones importantes que no deberían desestimarse, si lo que se busca es seguir reduciendo la brecha.

Lo anterior implica que la estrategia más sostenible para resolver la desigualdad intergrupala no puede ser la de la *compensación histórica* en función de grupos, sino la de crear una efectiva igualdad de oportunidades, y buscar mecanismos para compensar las desventajas en función de casos concretos. Es decir, mecanismos independientes de criterios arbitrarios, como la adscripción a tal o cual categoría demográfica, étnica o racial.

El argumento de la compensación histórica se derrumba cuando se le sustrae la asunción (implícita) de que la pertenencia a un grupo étnico es suficiente para suponer una condición de *deudor o acreedor histórico* imputable a los individuos vivos del presente. Lo que esta visión omite, es que la línea genealógica de cada persona está plagada de injusticias, perpetradas y sufridas, que son absolutamente irrastreables, pero que determinan el punto de partida de cada cual en la actualidad con mucha mayor precisión que su mero color de piel.

La falta de la aplicación efectiva de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (Estado de Derecho) denunciada por los activistas de las minorías, y la falta de un *piso mínimo* de oportunidades para todos (alimentación, educación, salud), son problemas que pueden atenderse de manera mucho más efectiva con políticas públicas focalizadas hacia comunidades y sujetos concretos en situación de desventaja más apremiante, independientemente del grupo étnico al que pertenezcan. Derivar de estos problemas la necesidad de imponer cuotas raciales, o de cualquier otro tipo, es un *non sequitur*.

Hacerlo no resuelve el problema ni ataca sus causas de fondo, maquilla la superficie y genera nuevos problemas.

En cualquier caso, es absurdo quitarle la posibilidad de ingresar a la universidad a un estudiante que obtuvo una calificación de 9 en su examen de admisión, para dárselo a otro que alcanzó un 8, por razón de que el primero es blanco y el segundo es negro. Tan absurdo como los tiempos en los que el segundo habría tenido negado el acceso a la universidad por el mismo criterio: su color de piel. Este dato aislado no permite asumir absolutamente nada sobre las condiciones de vida que ha enfrentado cada uno de los individuos.

Sin embargo, no sólo es moralmente denunciante este tipo de “acción afirmativa”, sino que el argumento sobre el que se sostiene es débil: si bien es cierto que, *en promedio*, la población blanca goza de mejores condiciones de vida que *el promedio* de la población negra, no son poco comunes los casos en el que un negro goza de mejores condiciones que un blanco. La falacia reside en tomar los agregados –que engloban situaciones altamente variables entre sí– como legitimación para decisiones que lastiman o privilegian a individuos concretos.

Ante todo, hacerlo resulta fundamentalmente injusto; y las decisiones parciales son siempre abono para el rencor y el resentimiento. Adicionalmente, negar por igual a todo miembro de un grupo poblacional entero (los blancos) la legitimidad para manifestar sus problemas, o desacreditarlos por *default* empleando frases como “revisa tu privilegio”, sólo puede abonar al sentimiento de frustración y enojo de las personas pertenecientes a tal grupo. Especialmente, al de los millones excluidos del proyecto nacional estadounidense, cuya evolución histórica ha sido documentada recientemente en libros como *White Trash: The 400-Year Untold Story of Class in America*, de Nancy Isenberg (2016), y *Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis*, de J. D. Vance (2016).

Un estudio publicado en 2009 por Thomas Espenshade –sociólogo de Princeton– encontró que los asiáticos y los blancos debían conseguir respectivamente 450 y 310 puntos SAT (Scholastic Aptitude Test) más que los estudiantes negros –donde el máximo en la escala es 1,600 puntos– para tener la misma oportunidad de ser admitidos en las universidades de élite del país (en este ámbito, la minoría asiática resulta aún más severamente discriminada que los blancos).¹

De manera poco sorprendente, el artículo de Frontgang fue desestimado haciendo uso de los mismos recursos discursivos simplistas en torno al

¹ Ver T. J. Espenshade y A. Walton Radford (2009), *No Longer Separate, Not Yet Equal: Race and Class in Elite College Admissions and Campus Life*, Nueva Jersey, Princeton University Press.

privilegio por parte de otros estudiantes de Princeton —una de las diez universidades de élite del mundo. Pero mientras los sectores universitarios se han ufanado de la superioridad moral e intelectual que atribuyen a su complacencia con la ideología detrás de la discriminación “progresista” desde hace décadas, el rencor hacía estragos silenciosamente afuera, en las ciudades en proceso franco de desindustrialización y en los poblados empobrecidos del Estados Unidos profundo. Y no pasaría mucho tiempo para que sus efectos dejaran de ser silenciosos.

El 9 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en Washington una convención de un grupo de extrema derecha y de supremacistas blancos denominado “Alt-Right” (acrónimo de *Alternative Right*). Durante el evento, Peter Brimelow, fundador del sitio nacionalista *Vdare.com*, preguntaba por qué si los hispanos tenían el Consejo Nacional de La Raza, y los judíos la Liga Anti-difamación, los blancos no se organizaban para impulsar *su propia agenda* en el país. La reunión se celebró muy cerca de la Casa Blanca, y no sólo por las dos cuadras que la separan del edificio Ronald Reagan, sino porque uno de los dirigentes de la organización racista, Stephen Bannon, había recibido el nombramiento oficial como principal asesor y *chief strategist* de la Casa Blanca por parte de Donald Trump.

La reunión terminó con el grito de *¡Hail Victory!* (la traducción al inglés del original *¡Sieg Heil!* alemán utilizado por los nazis) y *¡Hail Trump!*, pronunciado por el líder del “Alt-Right”, y recibido por la audiencia que saludaba con el brazo derecho extendido hacia el frente... ¿escalofriante?, ¿aberrante?, ¿demencial? sí, y pueden enlistarse otros calificativos. Pero la pregunta importante es: ¿no era de esperarse?

Han pasado décadas durante las cuales algunos grupos se han dedicado a lo que en Estados Unidos terminaron por llamar *Identity Politics*; esto es, la política hecha en función de grupos identitarios, orientada hacia la promoción de “su propia agenda” de intereses particulares en busca de incidir en las políticas públicas del gobierno (aunque estas agendas, postuladas por los activistas, no suelen someterse a ningún tipo de ejercicio que valide o desmienta su representatividad). Y durante las últimas cinco décadas, las instituciones han hecho concesiones importantes a sus exigencias.

Por supuesto que cuando aparecieron las primeras organizaciones de este tipo para defender los derechos de las minorías más desprotegidas —como el caso de nuestros compatriotas mexicanos—, ello supuso un complemento incuestionablemente positivo para la democracia de aquel país. Los problemas vinieron con una serie de ideas y prácticas *anti-liberales* que aunque partieron de una intención en principio noble, desvirtuaron completamente la concepción de la lucha de las minorías en el marco de una sociedad democrática.

Y apenas ahora, en este extraño momento histórico, que el mundo entero empieza a pagar las consecuencias de este mal entendimiento de lo que la democracia es y de los principios que la sostienen.

Giovanni Sartori –tal vez el mejor crítico de esta tendencia desde los años ochenta– insistió una y otra vez en que: “...sólo la democracia debe su misma existencia a sus valores”. Ya desde entonces, Sartori denunciaba cómo los ideólogos del posmodernismo buscaban –conscientemente– desprestigiar los valores fundamentales de las democracias liberales occidentales: libertad de expresión y de conciencia, pluralismo político y religioso, laicidad o neutralidad gubernamental, igualdad de trato (*a priori*) por parte de las instituciones, conocimiento científico como base de las decisiones públicas y, sobre todo, reconocimiento del valor intrínseco de la persona individual y de su autonomía.

Cuatro décadas después está claro que el programa antiliberal ha avanzado en su propósito, llevando a la democracia estadounidense, y a varias otras democracias de países desarrollados, al borde de gobiernos populistas, abiertamente racistas y autoritarios. En los siguientes párrafos ofreceré algunos ejemplos de este avance y señalaré las relaciones entre ambos fenómenos.

Otro problema de las “acciones afirmativas” es que se basan en *exclusiones fijas*. Es decir, justifican su existencia en alusión a la situación de vulnerabilidad de ciertas minorías, pero no suelen estar vinculadas a políticas que tengan por objetivo solucionar dicha situación; y más allá de su justificación discursiva, *no suelen estar formuladas en términos provisionales*, es decir, como medida temporal en función del cumplimiento de objetivos claros para revertir la desigualdad que las legitima. Tampoco suelen estar condicionadas a una evaluación periódica de los avances. Esto no es sólo un defecto de implementación, sino una derrota de los principios liberales fundamentales que genera incentivos perversos.

Si, como dijimos antes, la exclusión para la asignación parcial de recursos promovida por estas “acciones afirmativas” se plantea en términos fijos, *su legitimidad depende de la perpetuación de la percepción de que tal o cual grupo es tratado injustamente*. Y como no hay una evaluación periódica de indicadores claramente relacionados con la problemática que –en teoría– se pretende solucionar, se generan incentivos para que los grupos defiendan su legitimidad exacerbando su condición de víctimas de la injusticia sistémica. Es decir, a través de la victimización.

En agosto de 2011, el entonces periodista James O’Keefe intentó exponer cómo funciona esta dinámica al interior de los *campi* universitarios con un experimento extravagante. O’Keefe se presentó ante la Oficina de Asuntos de la Diversidad (Diversity Affairs Office) de la Universidad Miami de Ohio,

aduciendo representar a la Asociación de la Herencia Irlandesa de la Universidad, para presentar una queja formal por la indignante disponibilidad del cereal *Lucky Charms* (cuya imagen se centra en un gnomo estereotípicamente irlandés) en las cafeterías del *campus*. O'Keefe expone que sus tatarata-tatarata abuelos murieron como víctimas de la Gran Hambruna irlandesa, y pregunta airadamente al funcionario si eso le parece afortunado (*lucky*). Ante el reclamo, el funcionario se muestra comprensivo, declara que ése es justo el tipo de discriminación que la oficina está comprometida a erradicar, y se compromete a llevar el asunto al más alto nivel dentro de la Universidad. O'Keefe graba el episodio con una cámara oculta, y repite el experimento varias veces en diferentes universidades del país. Este es probablemente uno de los ejemplos más coloridos de esta tendencia, aunque de ninguna manera representa un caso aislado, ni el más grave.

Así, esta lógica de que la legitimidad se desprende de la condición de víctima ha vuelto comunes los debates en los que los participantes compiten por ser reconocidos como la víctima más grande, ya sea a través de historias personales o análisis pseudo-históricos, en los *campi* estadounidenses. El propio artículo de Frontgang incurre en esta lógica cuando el autor demanda recontar el pasado de persecución y sufrimiento de sus abuelos judíos escapando de la Polonia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, para legitimar una crítica que era válida por sí misma, independientemente de los antecedentes personales de su autor y los de su familia.

Lo que resulta irónico es que son especialmente los estudiantes universitarios que impulsan este tipo de discursos (uno de los segmentos más afortunados de la población) quienes se enorgullecen de denostar a las mayorías poco educadas: a los incultos trabajadores que no entienden sus rebuscados conceptos foucaultianos o la importancia de “deconstruir” el lenguaje. A ellos los llaman –paradójicamente– con expresiones despectivas y clasistas como *whitetrash* (basura blanca) con el que numerosos intelectuales progresistas se refieren a los votantes de Trump, o *basquet of deplorables* (el saco de los deplorables) como les llamó Hillary Clinton, en plena campaña electoral.

En consecuencia, estos polarizantes debates planteados en términos de la *calidad moral de los grupos* para impulsar demandas políticas, o simplemente para expresar su inconformidad con las condiciones determinadas, desplazaron cada vez más a las discusiones sobre redistribución de la riqueza, política exterior, asignaciones del presupuesto, reducción de la pobreza, condiciones laborales, regulaciones ambientales, o sobre los medios de comunicación, que en otras épocas tenían un lugar prioritario en la agenda pública y en el *campus* universitario. Nada más conveniente para un populista con la sensibilidad política suficiente para detectar el enorme espacio vacío.

¿Puede explicarse de otra manera la extravagante amalgama de contradicciones de los universitarios “progresistas” que apoyaron entusiastas la campaña de Clinton, conocida amiga del *fracking*, del intervencionismo militar, los bombardeos de poblaciones de civiles y de los intereses de Wall Street?

En los años setenta, Dankwart Rustow proponía que la unidad nacional era en realidad la única precondition necesaria para la aparición de la democracia. Y aunque su tesis ha sido cuestionada desde entonces a propósito de excepciones notables, una cuestión es segura: mientras el debate público gire en torno de la identidad de grupos particulares y de la pretensión de establecer una jerarquía moral entre ellos, queda muy poco espacio para la discusión de los problemas comunes; los problemas de la *polis*. Es decir, el debate público se *des-politiza*. Ahí el carácter fundamentalmente anti-político y tribalizante de este paradigma cultural que, también entre los universitarios mexicanos, ha ido ganando terreno en los últimos años.

La carta publicada en agosto de 2016 por parte del decano de la Universidad de Chicago para los alumnos de nuevo ingreso —y la controversia que causó—, es sintomática del estado de intolerancia extrema e irracionalidad promovido por esta ideología. La carta afirmaba el rechazo de la Universidad hacia los llamados *trigger warnings* y *safe spaces*:

Nuestro compromiso hacia la libertad académica significa que no apoyamos los llamados *trigger warnings*, no cancelamos a oradores invitados porque sus temas puedan resultar controversiales, y no condonamos la creación de *safe spaces* intelectuales donde los individuos puedan sustraerse de ideas y perspectivas que no coinciden con las suyas.

Pero ¿qué son los *trigger warnings* y los *safe spaces*? El diccionario de la Universidad de Oxford define los *trigger warnings* (literalmente *advertencia de desencadenador*) como: “Una declaración al inicio de una pieza escrita, de video, etcétera, que alerta al lector u observador del hecho de que la pieza contiene material potencialmente angustiante.”

Originados en los sitios *web* feministas para alertar al público de que el contenido podría actuar como un desencadenador post-traumático para víctimas de agresiones sexuales con TEPT (trastorno de estrés post-traumático), los *trigger warnings* fueron retomados por algunos sectores de alumnos de la Universidad de California en Santa Bárbara, en marzo de 2014. Estos grupos exigieron que los profesores los incluyeran en sus programas del curso, en cada tópico que pudiera resultar angustiante (*distressing*); y en consecuencia, debían obligatoriamente excusar a los alumnos de faltar a dichas clases si el tema a tratar pudiera hacerlos sentir incómodos. A partir de entonces,

esta exigencia se ha generalizado a lo largo de las universidades del país, y se extiende mucho más allá de cuestiones relacionadas con la violencia sexual, llegando a exigirse para tópicos potencialmente molestos (*distubing* o *upsetting*) para los prejuicios ideológicos de los estudiantes, en temas como historia, religión e incluso mitología griega.

No sólo han sido desmentidos los *trigger warnings* como una medida adecuada en las aulas por especialistas psiquiátricos, sino que también asociaciones de profesores universitarios se han pronunciado en contra de manera clara y contundente. Tal fue el caso de los miembros de la American Association of University Professors, quienes publicaron un texto en agosto de 2014 sobre el tema, en el que afirmaban que: “la presunción de que los estudiantes necesitan ser protegidos en vez de desafiados en el aula, es al mismo tiempo infantilizante y anti-intelectual”.

Por su parte, los *safe spaces* (espacios seguros) siguen una lógica similar. Se han convertido en la exigencia de asociaciones de alumnos de minorías étnicas o en pro de la diversidad sexual, de que en la Universidad se prohíban todas aquellas expresiones que cuestionen sus ideas, o desafíen sus posturas sobre ciertos temas, creando así un “espacio seguro” para estas comunidades, que de otra forma –aseguran– serían victimizadas como ocurre en el exterior del *campus*. Uno de los ejemplos más impactantes de los extremos de irracionalidad y violencia tribal a los que esta lógica ha llegado, es el tristemente célebre caso del Día de la Ausencia de los blancos, organizado en el *campus* del Evergreen State College en mayo de 2017.

Los dos ejemplos mencionados de los excesos cometidos impudicamente por parte de estos sectores militantes en nombre de los derechos de las minorías, revelan la característica más radicalmente polarizante de la lógica que los rige: un desdén absoluto por la verdad.

Sobre unos grupos que se niegan sistemáticamente a escuchar posturas contrarias, o a entablar un diálogo de argumentos informados entre posiciones diferentes, o que citan cifras estadísticas cuando conviene a sus posturas, pero las omiten deliberadamente cuando no, ¿cabe pensar que les interesa comprender las intrincadas complejidades de la realidad para ser capaces de resolver sus problemas?

Bien visto, el mismo desdén puede rastrearse hasta Foucault, quien *negaba la posibilidad de cualquier criterio objetivo o neutro de verdad* –siquiera uno parcial o contingente, como los postulados por Popper–, y afirmaba que la verdad no podía ser sino una narrativa arbitraria, impuesta por sobre otras alternativas igualmente vacuas por el poder del imperialismo occidental, que busca legitimarse a través del discurso científico.

Así, lo que es verdadero se reduce –para estos grupos como para el autor de “Microfísica del poder”–, a una mera cuestión de poder y contrapoder:

grupos dominados con narrativas no reconocidas y grupos hegemónicos que imponen la suya como la verdad. No hay nada más allá de esta pugna en cualquier postulado sobre lo que es la verdad.

¿Sorprende que después de décadas de este discurso, la derecha formulara su propia versión de este relativismo con los *alternative facts*? Esta naturaleza de las prácticas políticas de estos grupos identitarios han suscitado la acuñación de términos como *post-truth politics*, o *culture wars*, que designan la dinámica de dialéctica intransigente que se origina entre grupos que se asumen moral o intelectualmente superiores a sus interlocutores, que conciben que están en “el lado correcto de la Historia”, y que por lo tanto sus agendas deben ser impulsadas a toda costa, aun ante el conocimiento de evidencia que sugiera que sus postulados podrían estar equivocados.

Uno no puede evitar recordar a las *vanguardias* marxistas del siglo pasado, que siguiendo la lógica del “lado correcto de la Historia” hicieron posible el *Gulag* y se mantuvieron fieles al Partido Comunista ante las evidencias de los campos de concentración y de la persecución de disidentes por parte del régimen estalinista. Sartre, otro intelectual francés, resultó destacado en esta ceguera voluntaria.

Para ellos, cualquier arbitrariedad, cualquier abuso y cualquier injusticia –cometida contra personas reales del presente– era una insignificancia justificada por el advenimiento de la sociedad nueva y justa que estaban contribuyendo a construir con su militancia. Como postuló Marx: “la violencia es la partera de la Historia”.

Como sabemos, la sociedad utópica nunca llegó, y la ceguera moral colectiva que exigía la militancia contribuyó a engendrar un sistema aún más opresivo que el que sustituyó. Un sistema social y político que dejó tras de sí una estela de sangre cuya magnitud, medida en número de muertes, hace parecer a las brutalidades zaristas como una cosa de niños.

Pero a pesar de lo aberrante que resultan las demandas descritas para quien aprecia el pensamiento crítico y la discusión plural de las ideas, ambos tipos de medidas han avanzado institucionalmente durante los últimos años. Según una encuesta de NPR Ed, publicada en septiembre de 2016, la mitad de los profesores universitarios ha declarado haber utilizado *trigger warnings* en sus cursos.

Cuando uno piensa cómo ha sido posible que instituciones académicas serias cedieran ante estos reclamos, la única explicación que viene a la mente tiene dos causas: la presión política que estas *minorías intensas* –como las llamaba Sartori–, especializadas en el oficio de exacerbar el rencor, son capaces de ejercer sobre los funcionarios a través de su beligerancia exacerbada; y la cobardía de los funcionarios, que encuentran más cómodo

montarse acriticamente en el tren de *lo nuevo*, que hacer frente al fanatismo, en defensa de principios democráticos y pluralistas que vale la pena defender.

Lo que estos grupos intransigentes no han comprendido, es que en su lucha se han disparado en su propio pie; y el daño es potencialmente grave tanto para ellos mismos como para el resto de la sociedad.

Democracia y la lucha de las minorías en un contexto democrático

Estos grupos no entendieron que si han gozado de la libertad suficiente para formular sus demandas radicales e impulsar sus ideas incoherentes, es precisamente gracias a la serie de valores que han atacado: los valores del liberalismo democrático. Lo que no fueron capaces de vislumbrar a tiempo para evitar a Trump es que, como lo formuló el profesor Mark Lilla: *quien juega el juego de la política de la identidad, tendrá que estar dispuesto a perderlo*. Y claro está, la beligerancia de estas minorías identitarias no iba a permanecer para siempre sin ser contestada. Es ahora el grupo mayoritario en términos étnicos (los blancos anglosajones) al que se ha atacado constantemente desde la universidad como la causa de todos los males, quienes experimentan un “renacimiento de su propia identidad” en unos términos igualmente beligerantes.

“Hemos cruzado el Rubicón en términos de reconocimiento”, decía Richard Spencer, el presidente de Alt-Right durante la mencionada convención de supremacistas blancos del 9 de noviembre de 2016 en Washington. Su analogía fue sorprendentemente acertada. Cuando Julio César tentó la suerte cruzando el Rubicón junto con sus tropas, incurría en una violación grave de las leyes republicanas; lo que vino después fue la muerte de la República y el surgimiento del Imperio. También en aquella ocasión, la víctima había provisto las armas.

Al insistir en hacer política en función de las divisiones étnicas, han desencadenado al monstruo eterno de las sociedades humanas que sólo el liberalismo democrático había sido capaz de domar: lo que Stuart Mill llamó la *tiranía de la mayoría*. ¿Cómo reclamar ahora que es ilegítimo que se exijan diferentes derechos y obligaciones en función del grupo étnico al que pertenecen, si la idea la han estado impulsando ellos mismos desde hace décadas?

No comprendieron que si pretendían realizar cambios profundos encaminados a eliminar las desigualdades que denuncian, tenían que crear una narrativa incluyente que les permitiera conquistar el poder por la vía democrática. En vez de trazar la *línea de fuego* discursiva entre la élite corrupta del

sistema y los oprimidos –como lo intentaron Sanders y Trump–, los grupos que serían la base natural de la izquierda estadounidense, obsesionados con el reconocimiento de su condición de víctimas, han insistido en discursos divisivos y sectarios. Y ¿ahora se sorprenden de que la mayoría contra la que despotrican les diera la espalda?

Si pudiera resultar extraño observar el ideal de *fraternidad* puesto al lado de los ideales de *libertad* e *igualdad* en los estandartes de la Revolución Francesa, como una especie de romanticismo ligeramente fuera de lugar, su importancia se hace hoy más patente que nunca: si el régimen democrático trata de movilizar apoyos entre la población, sólo una conciencia mínima de tener un destino en común permite que las movilizaciones se generen en torno de ideas y proyectos, y no sólo en función de identidades particularistas y fijas. Cuando ocurre lo segundo, las minorías entran en un juego que, por definición, no pueden ganar. Y junto con ellas, pierde la democracia.

Significativamente, cuando Napoleón –el Julio César de la Primera República– mandó a aplacar las revueltas de los esclavos negros de Haití, el ejército de 1,200 esclavos rebeldes que recibió a las 12,000 tropas francesas en el asedio de La Crête à Pierrot lo hizo cantando *La Marsellesa*. El mensaje era claro: los haitianos exigían la misma libertad, igualdad y fraternidad pregonadas por los revolucionarios franceses; y esto no era una “revuelta”, sino una revolución. Una revolución impulsada por los mismos valores universales de libertad, igualdad y fraternidad, que estas minorías contemporáneas desdeñan ahora. Claro está, sólo en los países en donde la regla es el respeto de las libertades civiles.

Tras la captura de Louverture, el líder revolucionario, el general Dessalines, tomó el mando del ejército insurgente, lo condujo a la victoria final en Vertières y expulsó a los franceses de la isla, proclamando el primer gobierno independiente en toda la América Latina. Unos pocos meses después movilizó el rencor de la población negra llamando a matar a todos los blancos en el país –una especie de *compensación histórica*– y en nombre del pueblo liberado inauguró una larga tradición de dictaduras brutales. El 8 de octubre de 1804 se coronó como Jacques I, emperador de Haití.

Así, una lógica similar a la que mueve a los grupos contemporáneos, llevó a los haitianos a sustituir la dominación brutal de los blancos sobre los negros por la dominación brutal de los negros sobre los negros: desde el emperador Jacques I, hasta *Papa Doc* y *Baby Doc* Duvalier. Interpretaron la opresión en términos de macro-sujetos étnicos, opresores y oprimidos, y fallaron en identificar los mecanismos concretos por los que se perpetúa la opresión.

No es de extrañar que el discurso característicamente altisonante de estos grupos resultara poco persuasivo fuera de los *campus* universitarios; se

olvidaron por completo de los problemas del común de los norteamericanos. Resulta ilustrativo que Sanders –probablemente el único personaje que podía haber salvado a los demócratas– declarara: *America is sick and tired of hearing about liberals' damn bathrooms* (“Estados Unidos está cansado de escuchar sobre los endemoniados baños de los izquierdistas”), en alusión a los debates de la izquierda contemporánea en torno de la separación de los baños en términos de género binario (hombre y mujer) y cómo esto debe regularse urgentemente.

De hecho, estos sectores de la izquierda norteamericana están tan alejados de la realidad del ciudadano común, que fueron completamente inconscientes del desamparo en el que la dinámica de desindustrialización y automatización de la economía de las últimas décadas ha dejado a la clase trabajadora, a la clase media y a los más pobres en Estados Unidos.

La precarización de estos amplios sectores durante las últimas décadas es una causa mucho más plausible del giro dado por estados industriales tradicionalmente demócratas, como Wisconsin, Michigan o Pennsylvania, hacia la candidatura de Trump, que cualquier “intervención” de propaganda en portales financiados por Rusia.

En este punto, nadie debe sorprenderse de que la razón principal de apoyo que manifestaron algunos sectores de simpatizantes de Clinton fuera su género. Como los revolucionarios haitianos, estos jóvenes progresistas se enfocaron en los macrosujetos abstractos, en vez de en los mecanismos de la opresión. En este caso, ser mujer implica atribuirle legitimidad moral a un personaje político como Hillary Clinton.

Y a pesar de todo, después de perdidas las elecciones, los intelectuales de izquierda han llegado a la teoría simplista de que su derrota fue producto del machismo y racismo persistentes en la sociedad norteamericana blanca. No comprendieron el profundo contenido de clase de la elección de 2016, o no estuvieron dispuestos a cuestionar sus propias narrativas para comprenderlo. Esto probablemente provoque que la historia se repita en la elección de 2020.

Para ellos, el hecho de que los millones de trabajadores industriales, los campesinos y los desempleados norteamericanos que batallan diariamente con salarios precarios, deudas con un sector bancario mal regulado, la contaminación de las áreas donde residen (recientemente debido al *fracking*), no se sintieran preocupados por la división de género de los baños públicos, les hace motivo de vergüenza antes que de preocupación o empatía: son *white-trash*: “basura blanca”.

Para concluir, quiero ser más explícito en cuanto a los valores democráticos-liberales a los que me he referido y en por qué son incompatibles con algunos valores impulsados por la ideología de la política identitaria que he descrito.

La democracia liberal es el resultado de la conjunción de dos tradiciones políticas que no nacieron unidas: liberalismo y democracia. Mientras el ideal de la democracia es implantar el gobierno *del pueblo*—y, por lo tanto, su norma fundamental es la decisión de la mayoría—, el liberalismo se preocupa por salvaguardar la autonomía del individuo frente a la colectividad, y al hacerlo protege la integridad de las minorías.

La tensión entre ambos principios es evidente, y no ha sido fácil de resolver en la historia de la democracia.

De hecho, esta tensión ha suscitado largos y numerosos conflictos violentos antes de que ambos principios lograran conjuntarse en un sistema armónico, aunque imperfecto. Si un gobierno liberal sin valores democráticos—como la Inglaterra del siglo XVIII— resulta elitista y promueve la perpetuación de las diferencias de clase; una democracia no liberal en donde la mayoría decide todo el tiempo, sobre todos los asuntos, resultaría intolerablemente opresivo hacia los individuos que sostienen concepciones del mundo y de la vida distintas a las de la mayoría. Es decir, las minorías serían inevitablemente reprimidas.

El ideal democrático original tiene además otro problema: es un *ideal límite* imposible de llevar a cabo plenamente. Como lo demostró Michels, quien dice organización, dice oligarquía; y donde se congrega un grupo de seres humanos, no existe tal cosa como el equilibrio de poder en la toma de decisiones.

Así, el surgimiento de déspotas que ascienden al poder irrestricto diciéndose demócratas y abanderando las demandas del “pueblo”—esto es, de la mayoría— es una regla con muy escasas excepciones en la Historia, ahí donde no han existido los candados liberales contra la concentración del poder y que delimitan su ejercicio legítimo.

Al fin, el equilibrio funcional—pero siempre tenso— entre ambos principios se ha condensado en un sistema complejo de reglas y valores plasmados en las constituciones democráticas liberales, de cuyo respeto depende la supervivencia de todo el conjunto: libertad de expresión, de asociación y de conciencia, derecho a votar y ser votado, división de poderes, separación de la esfera de lo público y lo privado, igualdad jurídica (que implica que la ley deba ser *abstracta e impersonal*), parlamentos conformados por representantes populares electos por la ciudadanía y partidos políticos. Es precisamente este sistema lo que permite proteger a las minorías, en un contexto de toma de decisiones por mayoría, sin sacrificar el principio de igualdad legal entre los ciudadanos.

Vale la pena exponer brevemente cómo el concepto de *representantes populares* es vital para ello. A diferencia de las sociedades corporativas

medievales en donde algunos gremios tenían delegados, la democracia liberal se basa en el principio de *representatividad*, es decir, el pueblo elige (mediante la suma de votos individuales) a un representante que a su vez decida por él durante cierto periodo; no a un delegado obligado a obedecerle. Esta controversial cláusula de la representatividad, que algunos participacionistas han calificado de *anti-democrática* tiene una función fundamental: proteger a las minorías. De no ser así, unos delegados obligados a votar siempre de acuerdo al dictado mayoritario terminarían por aprobar decisiones que acabarían con los derechos de las minorías, y no podrían ser llamados a rendir cuentas por sus decisiones (porque serían meros portavoces). Piénsese, por ejemplo, si hubiera sido posible despenalizar el aborto en México bajo un esquema así.

Otro rasgo fundamental de estos representantes es el carácter de *popular*, es decir, son representantes *del pueblo*, y no de tal o cual grupo particular. La idea de las cuotas de grupos particulares rompe con este principio, siguiendo la dudosa idea de que el color de piel o el género de una persona determinarán cuáles serán sus intereses. Esto implica una concepción unidimensional de las personas, su reducción irreal a un solo atributo. Sin embargo, en los últimos años, esta lógica se ha impuesto en Parlamentos de numerosos países en cuanto al género, bajo el argumento (cierto) de que hay una *sub-representación* de las mujeres en los mismos, respecto de su proporción de la población nacional.

Siguiendo esta lógica, el problema es que la categoría de género no es la única que arroja grupos sub-representados, y con el mismo argumento podrían reclamar cuotas otros grupos: raciales, religiosos, de trabajadores, jóvenes, ancianos, personas con discapacidades físicas, y un largo etcétera de grupos que pueden tener intereses particulares legítimos, y que tendrían entonces el mismo derecho que las mujeres a reclamar su cuota. Lo que no es legítimo es llevar la representación de estos intereses particulares al Congreso en forma de cuotas fijas, porque los representantes representan al *pueblo*, y por lo tanto deben ser elegidos por el pueblo en función de sus ideas y proyectos respecto al gobierno de todos, no en función de sus afiliaciones o atributos particulares.

Más aún, lo que los promotores de estas medidas no contemplan –o prefieren omitir– es que *la suma de los intereses particulares de todos los grupos que componen a una sociedad* (suponiendo que pudiéramos representarlos efectivamente a todos en forma de cuotas fijas) *no equivale a los intereses de la sociedad en su conjunto*. Aquí dos más dos no suman cuatro, y esto es clave. Las consecuencias lógicas que se derivan de seguir el argumento de las cuotas, nos llevarían a un sistema de castas (divisiones fijas) en el

que cada grupo se preocupa sólo por los suyos, y el debate nacional se vería reducido a un mero manoteo de grupos por conseguir concesiones y privilegios para sí mismos, a costa de los otros.

Grave retroceso sería entonces ceder la *representación democrática* por una *representación demográfica*.

A propósito de lo anterior, vale la pena mencionar el *rol de los partidos políticos*. En un sistema de oposición de posturas y disputa continua, como es la democracia, los partidos se sobreponen a las divisiones reales que existen en cualquier sociedad, agregan las demandas de sectores diversos de la población y movilizan los apoyos de los ciudadanos en función de ciertos temas en determinadas coyunturas. Es decir, al sustituir a las divisiones fijas por divisiones coyunturales, permiten que la dinámica de confrontación democrática no enfrente siempre a los mismos grupos sociales. Por lo tanto, consienten una dinámica de *adversarios* en función de temas concretos, en lugar de una dinámica de *enemigos* permanentes, donde la posibilidad de diálogo es mínima, y donde los grupos minoritarios terminarán siempre por sucumbir ante la mayoría.

Por último, en cuanto a los reclamos por ampliar los espacios de *democracia directa*, los descalabros plebiscitarios de 2016 deberían servir de lección sobre los riesgos de someter decisiones importantes, sobre temas complejos, a la votación popular. En especial, ante un público escasamente preparado para decidir y convocado a hacerlo por razones de coyuntura política, en la que los líderes políticos se juegan su suerte en búsqueda de un *plus* de legitimidad, y “los platos rotos” los terminan pagando las sociedades.

Está claro que la democracia liberal no es una panacea.

Su defecto más grande es que no sirve, por sí sola, para revertir las injusticias sociales y económicas que presenta una sociedad. Sus virtudes, en cambio, han extendido las libertades de los individuos, la pluralidad de las ideas y el debate público a los niveles más altos que ningún otro régimen haya visto; y por lo tanto, es perfectamente compatible con opciones políticas cuya prioridad sea revertir que las injusticias sociales accedan al gobierno, a condición de convencer a la mayoría del electorado participativo, y en un marco de instituciones que eviten la excesiva concentración de poder.

La historia del siglo XX nos enseñó un par de cosas valiosas: a los liberales a ultranza, que si se desatienden las desigualdades económicas dejándolo todo al libre mercado, las libertades pueden esfumarse en un parpadeo, tras las convulsiones sociales que provocan los demagogos en el terreno fértil de la injusticia. A los colectivistas, que si se sacrifican las libertades individuales y las instituciones que las resguardan en pos de la lucha contra la desigualdad, más temprano que tarde veremos a la utopía sobre la tierra

convertida en vulgar dictadura.

Por su parte, la incipiente historia del siglo XXI nos enseña que tenemos que reforzar, urgentemente, los cursos de Historia en el currículo de la educación media-superior y superior.

La democracia y sus instituciones no pueden darse nunca por sentadas. Su fragilidad se ha hecho patente en diversos episodios de la Historia, cuando las sociedades democráticas han dado los pasos incorrectos y la han visto esfumarse con facilidad asombrosa. Hoy vivimos tiempos de polarización política extrema y de intransigencia radical por parte de grupos de todos los signos políticos, que están acercando a las democracias del mundo hacia esos pasos equivocados.

Creo sinceramente que la única salida no violenta a un clima de crispación así, es una verdadera terapia intensiva de memoria sobre la violenta historia de confrontación entre concepciones del mundo, que dio origen al liberalismo democrático y lo que su surgimiento ha significado para la humanidad en los últimos tres siglos. Quede esto como una modesta aportación para tal tarea imprescindible.